

Señor

**JUEZ PRIMERO (01) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGO**  
E.S.D.

MEDIO DE CONTROL:	<b>REPARACIÓN DIRECTA</b>
RADICADO:	<b>76-147-33-33-001-2020-00143-00</b>
DEMANDANTES:	<b>JUAN SEBASTIAN JIMENEZ CARDONA Y OTROS</b>
DEMANDADO:	<b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. Y OTROS</b>

**DAYANNA CAROLINA HERNANDEZ RICO**, domiciliada y residente en la ciudad de Cali, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.1.107.036.465 de Cali (Valle) y portadora de la Tarjeta Profesional No. 296.257 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi condición de apoderada judicial especial del **HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E.** encontrándome dentro del término legal procedo a **CONTESTAR LA DEMANDA** interpuesta por **JUAN SEBASTIAN JIMENEZ CARDONA, ADRIANA CARDONA, LUISA FERNANDA MURILLO CARDONA, MATIAS MURILLO CARDONA, ISABELLA CASTILLO MURILLO, DANNA SOFIA CAMPEON MURILLO**, contra el **HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E., EPS COOSALUD, HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, CLINICA MARIA ANGEL DE TULUA VALLE DEL CAUCA y HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA.**

En los siguientes términos procedo a dar contestación al libelo petitorio:

### **CAPITULO I**

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

**Al hecho 1:** Aunque NO ME CONSTA DIRECTAMENTE, una vez consultada la base de datos única de afiliados BDUA del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se evidencia que la señora Amparo Cardona Patiño se encontraba afiliada a COOSALUD EPS.

**Al hecho 2:** Es cierto, conforme a la prueba anexada.

**A los hechos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:** NO ME CONSTAN las atenciones médicas brindadas a la señora Amparo Cardona Patiño, los centros médicos que atendieron a la paciente, los diagnósticos a ella entregados, el resultado de exámenes paraclínicos, las fechas en que se realizaron los tratamientos y procedimientos mencionados, las autorizaciones entregadas a la usuaria, etc., pues son situaciones de modo, tiempo y lugar en las que no participó mi representada Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.

**No hay hecho 10.**

**A los hechos 12, 13, 14, 15, 16, 17:** NO ME CONSTAN, los centros médicos que atendieron a la paciente, los diagnósticos a ella entregados, el resultado de exámenes paraclínicos, las fechas en que se realizaron los tratamientos y procedimientos mencionados, las autorizaciones entregadas a la usuaria, etc., pues son situaciones de modo, tiempo y lugar son atenciones médicas brindadas a la señora Amparo Cardona Patiño, en otros centros médicos, en las que no participó mi representada Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.



**Al hecho 18:** Este hecho se compone de varias afirmaciones que responderé en los siguientes términos:

1. La señora Amparo Cardona Patiño ingreso el 19/03/2019 a las 23:10 horas y egreso el 19/03/2019 A LAS 23:40 horas, donde se encuentra con los siguientes signos vitales: presión arterial 120/70 mmHg, presión arterial media 86 mmHg, temperatura 36.5 °C, saturación de oxígeno 96%.
2. Una vez la ingresan al Hospital Universitario del Valle es recibida por el Doctor Carlos Antonio Franco Torres, médico general, quien indica que es paciente traída como urgencia vital de IPS de Cartago, por presentar cuadro clínico consistente en SD convulsivo, con posterior deterioro de su estado neurológico, trae TAC en donde se observa hemorragia interventricular. Paciente comentada con neurocirugía, requiere manejo en UCI, en momento sin disponibilidad de cupo, se redirecciona a otra institución que cuente con dicho servicio.

**Al hecho 19:** ES CIERTO, el Hospital informo que había otras instituciones que contaban con dicho servicio e indico cuales instituciones.

**No hay hecho 20**

**Al hecho 21, 22, 23, 24:** NO ME CONSTAN lo que se afirma en estos hechos. Sobre el particular la parte demandante, al tenor de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, deberá probar cada una de las afirmaciones realizadas en estos puntos.

**Al hecho 25:** NO ME CONSTA DIRECTAMENTE, una vez consultados los documentos aportados en el acápite de pruebas y anexos de la demanda, se puede evidenciar en el registro de defunción No. 720620930, que la señora Amparo Cardona Patiño falleció el 20 de marzo de 2019 a las 5:05 horas.

**Al hecho 26:** NO ME CONSTA DIRECTAMENTE, pero conforme a los registros civiles aportados en el acápite de pruebas y anexos, se puede evidenciar que hay un grado de parentesco familiar entre ellos.

**Al hecho 27:** NO ES UN HECHO, es una apreciación subjetiva por parte del apoderado de los demandantes, no hay evidencia probatoria con la cual se logre demostrar la responsabilidad extracontractual del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. por el sensible fallecimiento de la señora Amparo Cardona Patiño. En ese sentido la parte demandante, al tenor de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, deberá demostrar la supuesta falla en el servicio en la cual incurrió mi representada y por la cual reclama los perjuicios señalados en el libelo petitorio.

**Al hecho 28:** NO es HECHOS se trata del cumplimiento del requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

### **FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA**

Me opongo a la totalidad de las pretensiones incoadas en la demanda, por cuanto la parte demandante no logró acreditar todos y cada uno de los elementos de la responsabilidad extracontractual atribuida al extremo pasivo de la Litis. En ese sentido, carece de fundamento causal el presente medio de control y deberán despacharse desfavorablemente las pretensiones de la demanda.

Frente a las pretensiones del extremo activo de la Litis:



**Frente a la PRIMERA PRETENSION:** ME OPONGO a que se declare administrativa y solidariamente responsable al Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. y demás entidades demandadas, así como a las pretensiones indemnizatorias que formula la parte demandante por cuanto en el caso que se debate no se configuraron los elementos constitutivos de la falla en el servicio de salud que reprocha el extremo activo de la Litis.

**Frente a la SEGUNDA PRETENSION:** ME OPONGO a que se declare administrativa y solidariamente a mi representada Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. y demás entidades demandadas y, por consiguiente, las peticiones económicas que a continuación se solicitan:

**2.1. Perjuicios morales:** Me opongo al reconocimiento la pretensión indemnizatoria formulada por las siguientes personas:

Demandante	Parentesco	Cuantía de la pretensión
Juan Sebastián Jiménez Cardona	Hijo	100 SMLMV
Adriana Cardona	Hija	100 SMLMV
Luisa Fernanda Murillo Cardona	Hijo	200 SMLMV
Luis Fernando Mina Zamora	Nieta	50 SMLMV
Matías Murillo Cardona	Bisnieto	35 SMLMV
Isabella Castillo Murillo	Bisnieta	35 SMLMV
Danna Sofía Campeón Murillo	Bisnieta	35 SMLMV
Total		555 SMLMV

Es menester indicar que la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, estableció el marco indemnizatorio que debe tenerse en cuenta para la reparación del daño moral en caso de muerte, el cual depende de la relación parental que acredite cada reclamante:

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE					
REGLA GENERAL					
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
	Relaciones afectivas conyugales y paterno filiales	Relación afectiva del 2° de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	Relación afectiva del 3° de consanguinidad o civil	Relación afectiva del 4° de consanguinidad o civil	Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
Porcentaje	100%	50%	35%	25%	15%
Equivalencia en salarios mínimos	100	50	35	25	15

En ese entendido, una vez el Juez de Instancia encuentre probado que la entidad demandada ha causado un daño antijurídico, para el reconocimiento de los perjuicios reclamados en la demanda deberá tener en cuenta los parámetros indemnizatorios fijados por el Consejo de Estado en la precitada sentencia. No obstante, en el presente caso, se repite, no hay lugar a ningún tipo de reconocimiento indemnizatorio a la parte demandante dado que no se configuran los elementos de la responsabilidad del Estado y mucho menos



de la falla en el servicio de salud que se atribuye a mi representada y demás entidades demandadas.

De igual forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, *“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”*, siendo la parte demandante quien debe cumplir con la carga probatoria que le impone la norma legal en cita, allegando al proceso las pruebas que demuestren el daño para el reconocimiento de la indemnización reclamada.

Por lo anteriormente comentado, solicito se niegue la pretensión económica solicitada por la parte demandante.

**2.2.** ME OPONGO a que se declare administrativa y solidariamente responsable a mi representada Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. y demás entidades demandadas y, por consiguiente, se acceda al reconocimiento de perjuicios que soporto en vida y no alcanzo a reclamar la señora Cardona Patiño.

Juan Sebastián Jiménez Cardona y Adriana Cardona (Herederos)	100 smmlv	Perjuicios morales
Juan Sebastián Jiménez Cardona y Adriana Cardona (Herederos)	100 smmlv	Daño a la salud
Juan Sebastián Jiménez Cardona y Adriana Cardona (Herederos)	100 smmlv	Alteración grave a bienes e intereses constitucional y convencionalmente protegidos.

Seguido a ello, se cita la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado referente a la reparación de perjuicios inmateriales, en donde se establecieron, entre otras, las pautas para la reparación del **daño a la salud**:

“En los casos de reparación del daño a la salud se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, exp. 19031, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera.

La indemnización, en los términos del fallo referido está sujeta a lo probado en el proceso, única y **exclusivamente para la víctima directa**, en cuantía que no podrá exceder de 100 S.M.L.M.V, de acuerdo con la gravedad de la lesión, debidamente motivada y razonada, conforme a la siguiente tabla:

REPARACION DEL DAÑO A LA SALUD REGLA GENERAL	
Gravedad de la lesión	Víctima directa
	S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%	100
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10



Bajo este propósito, el juez debe determinar el porcentaje de la gravedad o levedad de la afectación corporal o psicofísica, debidamente probada dentro del proceso, relativa a los aspectos o componentes funcionales, biológicos y psíquicos del ser humano.

Para lo anterior el juez deberá considerar las consecuencias de la enfermedad o accidente que reflejen alteraciones al nivel del comportamiento y desempeño de la persona dentro de su entorno social y cultural que agraven la condición de la víctima. Para estos efectos, de acuerdo con el caso, se considerarán las siguientes variables:

- La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente)
- La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental.
- La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano.
- La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.
- La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria.
- Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria.
- Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado.
- Los factores sociales, culturales u ocupacionales.
- La edad.
- El sexo.
- Las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos y agradables de la víctima.
- Las demás que se acrediten dentro del proceso. (...)”

En ese sentido, el juzgador de instancia, en el hipotético y remoto evento en que encuentre demostrada la responsabilidad por parte del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., el reconocimiento indemnizatorio que se haga al actor deberá ceñirse estrictamente a la alteración en la salud que éste logre demostrar dentro del proceso.

**2.3.** ME OPONGO a que se declare administrativa y solidariamente responsable a mi representada Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. y demás entidades demandadas y, por consiguiente, se acceda al reconocimiento de disculpas a la parte demandante, por cuanto el extremo activo de la Litis, aun encontrándose en el deber de hacerlo, no ha aportado con la demanda las pruebas conducentes, pertinentes y útiles con las cuales se pueda determinar que se configuraron los elementos constitutivos de la falla en el servicio de salud que reprocha el extremo activo de la Litis.

**2.4.** ME OPONGO a que se declare administrativa y extracontractualmente responsable a mi representada Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. y demás entidades demandadas y, por consiguiente, se acceda al reconocimiento de lucro cesante a la parte demandante y tasado en la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$125.927.641) por cuanto el extremo activo de la Litis, aun encontrándose en el deber de hacerlo, no ha aportado con la demanda las pruebas conducentes, pertinentes y útiles con las cuales se pueda determinar los ingresos que percibía la señora Amparo Cardona Patiño para la fecha de su fallecimiento.

En el mismo sentido, de conformidad con la jurisprudencia reiterada y unificada de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el perjuicio material a indemnizar, en la modalidad de lucro cesante, debe ser cierto y, por ende, edificarse en situaciones reales, existentes al momento de ocurrencia del evento dañino, toda vez que el perjuicio eventual o hipotético,



por no corresponder a la prolongación real y directa del estado de cosas producido por el daño, no es susceptible de reparación.

En igual sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en reciente sentencia de unificación, estableció los lineamientos para el reconocimiento de los perjuicios materiales, por concepto de lucro cesante, en los casos de privación injusta de la libertad, de la siguiente forma<sup>1</sup>:

**“2. Unificación jurisprudencial en materia de reconocimiento y liquidación de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.**

Esta corporación concibe el lucro cesante como “... la ganancia frustrada o el provecho económico que deja de reportarse y que, de no producirse el daño, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima. (sic) Pero que (sic) como todo perjuicio, para que proceda su indemnización, debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a reparación alguna” (se resalta).

(...)

En suma, la Sala de la Sección optó por disponer indemnizaciones por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, en los eventos de privación injusta de la libertad, a partir de la aplicación de manera indistinta de presunciones de orden interpretativo; así, para la liquidación de este perjuicio, presumió que: i) ante la ausencia de la prueba del ingreso devengado por la víctima del daño, si se encontraba en una edad productiva, ésta recibía como ingreso, al menos, un salario mínimo legal mensual, incluso con independencia de que hubiera acreditado o no que al tiempo de la detención mantenía un vínculo laboral o desempeñaba una actividad que le reportara ingresos, ii) la víctima, luego de recobrar la libertad, requería un tiempo adicional para reubicarse laboralmente, sin importar para ello si era empleado o independiente y iii) el ingreso de la víctima debía incrementarse en un 25%, por concepto de prestaciones sociales, sin importar si, para cuando perdió libertad, era asalariado o no.

(...)

Agrégase a lo anterior que las orientaciones jurisprudenciales anteriormente mencionadas y las presunciones jurisprudenciales aplicadas con el objeto de determinar la existencia y el monto de los perjuicios materiales podrían entenderse en el sentido de que, cumplidas ciertas condiciones, los demandantes tienen derecho, per se, a obtener el pago de perjuicios en determinado monto; sin embargo, ello podría llevar a desconocer involuntariamente en algún caso que el reconocimiento de un perjuicio solo procede si ha sido solicitado por la parte interesada, lo que implica que ésta lo reclame de manera expresa y cuantifique su monto de manera

<sup>1</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación del 18 de julio de 2019, C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp: 44572.



razonada (artículo 162, numerales 2 y 6 del C.P.A.C.A. –antes artículo 137 del C.C.A.- y artículo 281 de C.G.P. –antes 305 del C. de P.C.-) y a ello se puede acceder siempre que dicha parte haya cumplido con la carga de acreditar tanto la existencia como la cuantía del perjuicio.

La ausencia de petición, en los términos anteriores, así como el incumplimiento de la carga probatoria dirigida a demostrar la existencia y cuantía de los perjuicios debe conducir, necesariamente, a denegar su decreto.

Los perjuicios materiales solo pueden decretarse previo estudio motivado y razonado que tenga en cuenta las pretensiones y las pruebas aportadas por la parte; así, solo se puede conceder al demandante el perjuicio reclamado, a partir de la apreciación razonada y específica que el juzgador realice de los medios probatorios obrantes en el expediente, en la que se consideren las circunstancias concretas que permitan deducir que, en efecto, la detención le generó la pérdida de un derecho cierto a obtener el ingreso que, de no haberse producido el daño, habría seguido percibiendo o podría haber percibido como producto de la labor que desempeñaba antes o que iba a empezar a percibir en razón de una relación existente pero que apenas iba a empezar a cumplirse.

Tratándose del lucro cesante causado durante la detención y de la imposibilidad de percibir un ingreso con posterioridad a la misma, el juzgador deberá tener en cuenta que no puede asimilarse el caso de una persona que tiene vigente una actividad productiva lícita que le genera ingresos por sus servicios que efectivamente se interrumpen o terminan con su detención, con el evento en que ésta no genera tal efecto o con aquel en el que esa actividad no existe y, por ende, la detención no implica la pérdida de un lucro económico.

En los casos en los que se pruebe que la detención produjo la pérdida del derecho cierto a obtener un beneficio económico, lo cual se presenta cuando la detención ha afectado el derecho a percibir un ingreso que se tenía o que con certeza se iba a empezar a percibir, el juzgador solo podrá disponer una condena si, a partir de las pruebas obrantes en el expediente, se cumplen los presupuestos para ello, frente a lo cual se requiere que se demuestre que la posibilidad de tener un ingreso era cierta, es decir, que correspondía a la continuación de una situación precedente o que iba a darse efectivamente por existir previamente una actividad productiva lícita ya consolidada que le permitiría a la víctima directa de la privación de la libertad obtener un determinado ingreso y que dejó de percibirlo como consecuencia de la detención.

(...)

## **2.1 Presupuestos para acceder al reconocimiento del lucro cesante**

2.1.1 Por concepto de lucro cesante sólo se puede conceder lo que se pida en la demanda, de forma tal que no puede hacerse

ningún reconocimiento oficioso por parte del juez de la reparación directa; así, lo que no se pida en la demanda no puede ser objeto de reconocimiento alguno.

2.1.2 Todo daño y perjuicio que el demandante pida que se le indemnice por concepto de lucro cesante **debe ser objeto de prueba suficiente que lo acredite o, de lo contrario, no puede haber reconocimiento alguno** (artículos 177 del C. de P. C. y 167 del C.G.P.).

Así, para acceder al reconocimiento de este perjuicio material debe haber prueba suficiente que acredite que, la persona afectada dejó de percibir sus ingresos o perdió una posibilidad cierta de percibirlos.

De conformidad con lo anterior, la parte demandante, para la tasación del perjuicio material, es quien debe demostrar los ingresos que devengaba al momento de la causación del daño, pues desde la fecha de dicha providencia ya no existe la presunción de que una persona devenga el salario mínimo legal mensual vigente. Dado que no existen pruebas con las cuales se pueda determinar que la señora Cardona Patiño percibía ingresos, debe despacharse desfavorablemente esta solicitud de reconocimiento indemnizatorio.

**Frente a la TERCERA PRETENSION:** Frente a las pretensiones que tienen que ver con el pago de intereses e indexación de las condenas para la fecha en que se profiera la sentencia de instancia, dado que no está demostrada la responsabilidad del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. en la producción del daño que alega la parte demandante, siendo improcedente el reconocimiento de perjuicios, mucho menos podría pensarse en acceder a las denotadas pretensiones subsidiarias.

**Frente a la CUARTA Y QUINTA PRETENSIÓN:** que tienen que ver con condena en costas y el pago de perjuicios en abstracto, para la fecha en que se profiera la sentencia de instancia, dado que no está demostrada la responsabilidad del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. en la producción del daño que alega la parte demandante, se torna improcedente el reconocimiento de perjuicios, por lo que de ninguna forma podría pensarse en acceder a las denotadas pretensiones subsidiarias.

### **CAPÍTULO III**

#### **EXCEPCIONES DE MERITO FRENTE A LA DEMANDA**

##### **1. INEXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO ALEGADO POR LA PARTE DEMANDANTE.**

El daño es entendido como la alteración negativa a un interés protegido, que si bien surge como un fenómeno físico o material (como la lesión, la muerte, la destrucción, la retención, entre otros), lo cierto es que su contenido es eminentemente deontológico y normativo, toda vez que no toda alteración del mundo exterior puede ser considerada un daño en sentido jurídico.

En ese sentido, el primer elemento que se debe constatar en cuanto a la responsabilidad patrimonial del Estado es la existencia del daño, el cual, además, debe ser antijurídico, dado que constituye un elemento necesario de la responsabilidad, toda vez que, como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado “*sin daño no hay responsabilidad*” y solo ante su acreditación hay lugar a explorar la posibilidad de imputación del mismo al Estado.



Sobre el particular el Consejo de Estado, en Sentencia del año 2015, reiteró:

*“Como lo ha señalado la Sala en ocasiones anteriores, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa, es la existencia del daño, puesto que, si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos.*

*“En efecto, en sentencias proferidas (...) se ha señalado tal circunstancia precisándose (...) que ‘es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, esto es, si el mismo puede, o no calificarse como antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado...’ y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se han elaborado”<sup>2</sup>.*

El daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere estar cabalmente estructurado; por tal motivo, la Sección Tercera del Consejo de Estado –Subsección A- ha establecido que resulta imprescindible acreditar los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama, a saber: **i)** la afectación a un derecho subjetivo o un interés legítimo (patrimonial o extrapatrimonial) del cual sea titular la víctima, es decir, que se trate de un bien jurídicamente protegido; **ii)** que dicha afectación sea cierta, concreta y determinada; **iii)** que sea personal y **iv)** que no se hubiera reparado por otra vía<sup>3</sup>.

Aterrizando al caso concreto, se atribuye responsabilidad extracontractual a título de falla en el servicio al Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. como consecuencia del fallecimiento de la señora Amparo Cardona Patiño, por cuanto, según las afirmaciones de la parte demandante, la paciente no fue atendida conforme a la *lex artis* y a los estándares de la medicina existentes para la fecha en que fue remitida a nuestra institución.

Es menester indicar que la paciente, desde el momento de su ingreso, una vez revisada la remisión y los signos vitales, debido al alto uso de camas en UCI y no tener espacio para la paciente y estar en proceso de remisión de pacientes UCI a otras instituciones, es remitida a otra clínica con un nivel mayor de acuerdo a su patología y una vez indicado que si había camas disponibles para UCI en esa institución.

Se puede observar en la historia clínica de la periferia que se trata de una paciente que estaba en estado crítico, con el siguiente diagnóstico:

---

<sup>2</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2015, exp. 28.389, M.P. Hernán Andrade Rincón. La Subsección, de forma pacífica, ha reiterado el criterio antes expuesto. Al respecto se pueden consultar las siguientes decisiones: i) radicado No 38.824 del 10 de noviembre de 2017; ii) radicado No 50.451 del 10 de noviembre de 2017; iii) radicado No 42.121 del 23 de octubre de 2017; iv) radicado No 44.260 del 14 de septiembre de 2017; v) radicado No 43.447 del 19 de julio de 2017; vi) radicado No 39.321 del 26 de abril de 2017, entre otras.

<sup>3</sup> Sobre el particular se puede consultar, entre otras providencias, la proferida por esta Subsección del Consejo de Estado el 24 de enero de 2019, expediente (40993)



Remision No. 2  
Especialidad:  
CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Acepta:

X

Motivo:

Nivel de competencia

Observaciones:

dx: Femenina de 63 años de edad Antecedente de hipotirodismo se desconoce tratamiento. Paciente que ingresa en contexto de episodio de emesis en repetidas ocaciones, ademas de cefalea frotnococular intensa queluego se generaliza. Ingesa a urencias despiera, alerta cosciente y orientada, se indico observacion medica y posterior a ello presenta epidosio de convulsion tonico clonica que se generaliza, asociado a ello presenta sialorrea, presenta recuperacion de estado neurologico de forma espontanea a los 5 pminutos, se inicio manejo medico y se indico observacion neurologica, paciente que ingesa estable hemodinamicamente, con Ta 145 /60 fc 60 x min. fr 16 sao2 97% Normocefalo, mucosas humedas, sin masas ni megalias, conjuntivas rosadas. Cuello simetrico no ingurgitado, Rscrs sin soplos mv presente, no hay signos de dificultad respiratoria. Abd blando depersibe sin masas ni megalias. Ext: moviles simetricas sin edemas. hiperreflexia demiembro inferior izquierdo. Gu: con relajacion de esfinter vesical. Snc: alerta, despiera, reactiva a estímulos, con glasgow 15/15. presneta desorientacion temporo-espacial, se toma con alucinaciones visuales, Pupilas isocoricas normoreactivas, hay limiacion para la marcha por fuerza disminuida enmiembros inferiores. Ap: paciente femenina de 63 años de edad, quien ingrsa encontexto de cefalea y emsis y quien presenta episodio convulsivo gneralizado ( sin antecedentes de epilepsia) ingresa estable hemodinamicamente, sin disnea ni signos de bajo gasto, llama la atencion al examen fisico encontrar alteracion neurologica dada por desorientacion temporo- espacial y que se torna con alucinaciones y reljacion de esfinter vesical. Se indica ante sospecha de evento cerebrovascular Vs lesion cerebral o masas cerbral dejar en observacion para vigilancia del estado neurologico, se indica continuar manejo con fenitoina y se inicia tramite de remision para valoracion por medicina interna / neurocirugia- paciente que amerita toma de neuroimagen por deterioro neurologico y episodio convulsivo generaliado sin antecedentes de epilepsia. TAC SIMPLE DE CRANEO REPORTA CON HEMORRAGIAS INTRAVENTRICULAR , FALTA REPORTE OFICIAL DE EL TAC PACIENTE DETORIRO DEL ESTADO NEUROLOGICO CON GLASGOW 4/15 EN EL MOMENTO INCOCIENTE SIN RESPUES CON AL TERACION DEL ESTADO DE CONCIENCIA. SPO2 97% FC 55 X MIN , SIN REPSUESTA , SE HACE DX 1 HEMAORRAGIA CEREBRAL INTERVENTRICULAR , SE PASA SAL DE REANIMACION , Y SE INICIA PROCESO DE ENTUBACION ENDOTRAQUAL Y SE LE EXPLICA A LOS FAMILIARES QUE EL PRONOSTICO ES RESERVADO , Y SE REMIETE CON URGENCIA VITALA PARA HOSPITAL SAN JORGE DE PEREIRA

Institución:

Autorización:

X

Incluir Ambulancia:

Si

Modalidad:

Remision

Se puede observar que el 19 de marzo de 2019 a las 16:45 horas, antes de ordenar la remisión de la señora Amparo Cardona, ya estaba inconsciente con Gasglow<sup>4</sup> 4/15, es decir que la paciente ya se encontraba en una escala de coma, mas no como lo asegura el apoderado del demandante que fue en el transcurso del trayecto de la ambulancia que genero el estado de coma de la señora Cardona.

Como se indicó, para la fecha el 19 de marzo de 2019 a las 23:10 horas, ingresa a nuestra institución la paciente Cardona Patiño siendo remitida desde la periferia IPS de Cartago, siendo el motivo de consulta, sus signos vitales y la clasificación de Triage, los siguientes:

Ingreso	19	3	2019	Ingreso	23:10	Egreso	19	3	2019	Egreso	23:40
---------	----	---	------	---------	-------	--------	----	---	------	--------	-------

CLASIFICACIÓN DEL PACIENTE			
Nro. de Clasificación:	265587		
Fecha – Hora de Llegada:	19/03/2019 23:10	Fecha – Hora de Atención:	19/03/2019 23:27
Lugar de nacimiento:	CARTAGO		
Llego en ambulancia:	Si.		

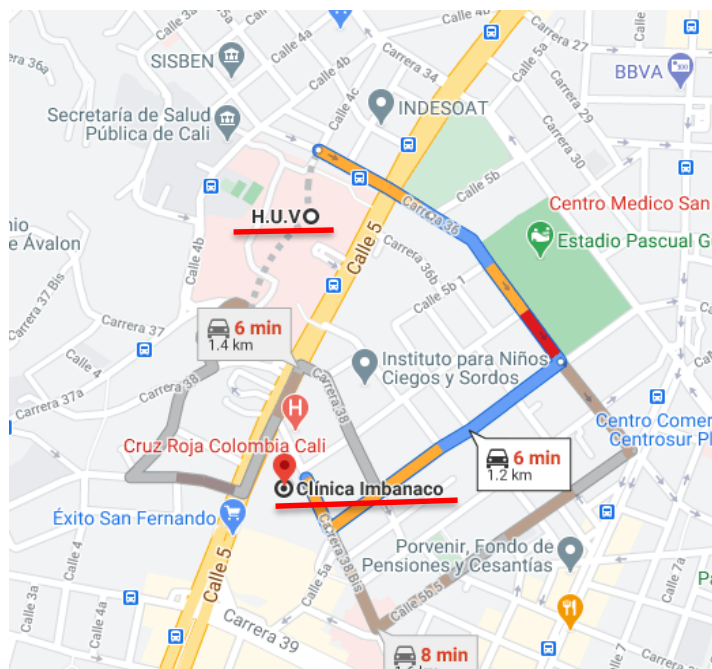
DATOS CLÍNICOS			
MOTIVO DE CONSULTA			
REMITIDA COMO URGENCIA VITAL			
SIGNOS VITALES			
Presión Arterial:	120/70 mmHg	Presión Arterial Media:	86 mmHg
Toma Presión:	Manual		
Temperatura:	36.5 °C	Saturación de Oxígeno:	96 %
DIAGNÓSTICO DESCRIPTIVO			
I679			
Clasificación:	2 - TRIAGE II	Ubicación:	CONSULTORIOS URGENCIAS
JUSTIFICACIÓN			
PACIENTE TRAIDA COMO URGENCIA VITAL DE IPS DE CARTAGO, POR PRESENTAR CUADRO CLINICO CONSISTENTE EN SD CONVULSIVO, CON POSTERIOR DETERIORO DE SU ESTADO NEUROLOGICO, TRAE TAC EN DONDE SE OBSERVA HEMORRAGIA INTERVENTRICULAR. PACIENTE COMENTADA CON NEUROCIRUGIA, REQUIERE MANEJO EN UCI, EN MOMENTO SIN DISPONIBILIDAD DE CUPO, SE REDIRECCIONA A INSTITUCION QUE CUENTE CON DICHO SERVICIO.			
Firmado por: CARLOS ANTONIO FRANCO TORRES , MEDICINA GENERAL , Reg: 6102046			

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se ve una incoherencia en el horario y situaciones indicadas, debido a que, la señora Cardona Patiño ingresa al Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., a las 23:10 horas; en esa institución fue atendida a las 23:26 horas

<sup>4</sup> La escala de coma de Glasgow es una valoración del nivel de conciencia consistente en la evaluación de tres criterios de observación clínica: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Cada uno de estos criterios se evalúa mediante una subescala.



y a las 23:40 se remitió a otra clínica por no haber disponibilidad de cama UCI, lo que no se entiende es que solo hasta la 1:05 a.m llegaron a Imbanaco, si esta clínica está cerca del Hospital Universitario del Valle, exactamente a 6 minutos en carro, y según las indicaciones del apoderado del demandante y la historia clínica de ingreso en el Centro Medico Imbanaco hubo un trayecto de 1 hora y 25 minutos entre el HUV y el Centro Medico.



No se encuentra que el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., haya incurrido en una omisión en la prestación del servicio como lo afirma el apoderado de la parte demandante, toda vez que, es claro, dadas las condiciones de la paciente al ser remitida, que su estado de salud era crítico y en las historias clínicas aportadas por la parte demandante, se evidencia que desde el Hospital de Cartago la paciente ya contaba con HSA<sup>5</sup> FISHER IV<sup>6</sup>, posterior deterioro neurológico<sup>7</sup> a las 13 horas del ingreso, requerimiento de intubación orotraqueal, remitida como urgencia vital 24 horas posterior al evento y con deterioro neurológico de Gasglow 3/15.

Motivo por el cual requería ser remitida a UCI, donde la remitieron como una urgencia vital, pero no fue comentada previamente en nuestra institución, situación que realizan las eps para tener conocimiento de disponibilidad de camas y la preparación del equipo médico necesario conforme a la patología que presente el paciente que están remitiendo; una vez ingresa al hospital se le comenta que no hay disponibilidad de cama en la UCI, debido a la alta demanda de pacientes en la UCI para esa época, es por ello que se realizó la gestión de información acerca de la entidad a la que podía ser remitida que era el Centro Medico Imbanaco, donde se indicó que había camas disponibles en UCI y efectivamente una vez ingresó fue atendida y procedieron a realizarle los protocolos médicos conforme a la patología que presentaba la señora Amparo Cardona Patiño, mal haría el Hospital en aceptarla y no poder realizarle los procedimientos que requería por falta de disponibilidad

<sup>5</sup> La hemorragia subaracnoidea es el volcado de sangre en el espacio subaracnoideo, donde normalmente circula líquido cefalorraquídeo (LCR), o cuando una hemorragia intracraneal se extiende hasta dicho espacio.

<sup>6</sup> Hemorragia intraparenquimatosa o intraventricular, en ausencia de hemorragia subaracnoidea con coagulos localizados o capa vertical  $\geq 1$  mm.

<sup>7</sup> Un déficit neurológico es una anomalía funcional de un área del cuerpo. Esta alteración funcional se debe a una disminución del funcionamiento del cerebro, la médula espinal, los músculos o los nervios.



de camas y por el estado crítico de la paciente se consideró necesario re direccionarla a una entidad que si tenía todos los servicios disponibles para su tratamiento.

Es por todas las consideraciones que se prevén en esta excepción que se demuestra que el daño antijurídico atribuido a la entidad demandada al Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., es inexistente puesto que se trató de una paciente que fue remitida por urgencia vital al Hospital Universitario del Valle, sin ser comentada de manera previa por la EPS COOSALUD, para saber la disponibilidad de las camas en la UCI, y el HUV al no tener la disponibilidad procedió a informar en que entidad si lo había y los direcciono hacia esa clínica.

En ese sentido, ruego declarar probada la presente excepción.

## **2. INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA. LA PARTE DEMANDANTE TIENE EL DEBER LEGAL DE DEMOSTRAR LA FALLA EN EL SERVICIO POR PARTE DE LAS ENTIDADES DEMANDADAS. REGIMEN DE LA FALLA PROBADA.**

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, por regla general, el título de imputación aplicable en asuntos médico–sanitarios es el de la falla probada el servicio. Como consecuencia, le corresponde a la parte demandante demostrar el desconocimiento de la *lex artis* aplicable al caso concreto, en otros términos, la desatención a las obligaciones que emanan del conocimiento científico:

“Este aspecto que no ha sido pacífico en la jurisprudencia, comoquiera que paralelamente a la postura que en una época propendió por cimentar la responsabilidad estatal en estos casos sobre la falla presunta del servicio, ha tenido acogida, igualmente, la posición –por lo demás prohijada por la Sala en sus más recientes fallos– de acuerdo con la cual el título jurídico de imputación a tener en cuenta en los supuestos en comento es el de la falla del servicio probada.

Así pues, de la aceptación –durante un significativo período de tiempo– de la aplicabilidad de la tesis de la falla del servicio presunta a este tipo de casos por entender más beneficioso para la Administración de Justicia que en lugar de someter al paciente a la demostración de las fallas en los servicios y técnicas científicas prestadas por especialistas, se impusiese a éstos –por encontrarse en las mejores condiciones de conocimiento técnico y real de cuanto hubiere ocurrido– la carga de atender los cuestionamientos que contra sus procedimientos se formulan por los accionantes , posteriormente se pasó al entendimiento de acuerdo con el cual el planteamiento en mención condujo a que en todos los litigios originados en los daños causados con ocasión de la prestación del servicio médico asistencial se exigiese, a las entidades públicas demandadas, la prueba de que dicho servicio hubiere sido prestado debidamente, para posibilitarles la exoneración de responsabilidad, cuando en realidad

‘... no todos los hechos y circunstancias relevantes para establecer si las entidades públicas obraron debidamente tienen implicaciones técnicas o científicas. Habrá que valorar, en cada caso, si estas se encuentran presentes o no. Así, habrá situaciones en las que, sin duda, es el paciente quien se encuentra en mejor posición para demostrar ciertos hechos relacionados con la actuación de la entidad respectiva. Allí está, precisamente, la explicación del dinamismo de las cargas, cuya aplicación se hace imposible ante el recurso obligado a la teoría de la falla del servicio



presunta, donde simplemente se produce la inversión permanente del deber probatorio'

*Con fundamento en dicha consideración, se determinó que la demostración de la falla en la prestación del servicio médico asistencial corre por cuenta de la parte demandante.”<sup>8 9</sup>.*

En el caso concreto se encuentra que la parte demandante no ha aportado una sola prueba –ni siquiera indiciaria– con la cual se demuestre la existencia del nexo causal y la falla del servicio invocados en la demanda. En ese sentido, el extremo activo de la Litis, encontrándose en el deber de hacerlo, no ha demostrado que el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., sea responsable por el fallecimiento de la señora Amparo Cardona Patiño.

En ese sentido, solicito comedidamente se declare probada la presente excepción.

### **3. AUSENCIA DE CONFIGURACIÓN DE LA FALLA EN EL SERVICIO ADUCIDA POR LA PARTE DEMANDANTE.**

Del análisis integral de los elementos probatorios recaudados hasta el momento en este proceso, es viable llegar a la conclusión de que no se configuró la responsabilidad alegada por la parte actora, toda vez que no existe prueba que acredite la responsabilidad del Hospital Universitario del Valle por una supuesta falta de diligencia, pericia, prudencia o retardo en el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales adquiridas. De tal manera que, ante la ausencia de las conductas presuntamente negligentes u omisivas por parte del hospital asegurado, carece este caso de la supuesta falla en el servicio como elemento constitutivo de la responsabilidad extracontractual del Estado al Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., debiendo exonerarse a mi representada en el presente proceso.

La falla en el servicio es un título de imputación en materia de responsabilidad extracontractual del Estado el cual debe ser probado dentro del proceso y no es presumible por parte del operador judicial, ya que al juez le está vedado presumir situaciones o responsabilidades basado en “dichos” de la parte actora. Es precisamente en ese sentido en que se presenta este medio exceptivo, pues al no estar probada la falla en el servicio, ni tener elementos de prueba que puedan si quiera dar un indicio de la existencia de ella, deberá declararse su ausencia, lo cual deja sin soporte jurídico la demanda y por lo tanto deberán despacharse todas las pretensiones sin resultado favorable alguno.

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha consolidado una posición en materia de responsabilidad del Estado por la prestación del servicio de salud, en virtud de la cual

---

<sup>8</sup> Cita del original. “Aunque se matizará el referido aserto con la aseveración de acuerdo con la cual dicha regla general se exceptuaría cuando la carga probatoria atribuida al demandante ‘resulte extraordinariamente difícil o prácticamente imposible y dicha carga se torne, entonces, excesiva. Solo en este evento y de manera excepcional, será procedente la inversión del deber probatorio, previa la inaplicación del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil –que obligaría a la parte actora a probar siempre el incumplimiento por el demandado de su deber de prestar debidamente el servicio mencionado–, por resultar la regla en él contenida, en el caso concreto, contraria a la equidad, prevista en el artículo 230 de la Constitución Política como criterio auxiliar de la actividad judicial”. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de diciembre de 2004, rad. 14.421.

<sup>9</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2011, exp. 19.192, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.



aquella es de naturaleza subjetiva, advirtiendo que es la falla probada del servicio el título de imputación bajo el cual es posible configurar la responsabilidad estatal por la actividad médica hospitalaria, de suerte que se exige acreditar la falla propiamente dicha, el daño antijurídico y el nexo de causalidad entre aquella y éste.

En materia médica, para que pueda predicarse la existencia de una falla, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado que es necesario que se demuestre que la atención no cumplió con estándares de calidad fijados por el estado del arte de la ciencia médica, vigente en el momento de la ocurrencia del hecho dañoso. Del mismo modo, deberá probarse que el servicio médico no ha sido cubierto en forma diligente, esto es, que no se prestó el servicio con el empleo de todos y cada uno de los medios humanos, científicos, farmacéuticos y técnicos que se tengan al alcance

Al tenor de lo expuesto y según los documentos que militan en el plenario, no se encuentra acreditado que el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. hubiere prestado inadecuadamente el servicio de salud requerido por la señora Amparo Cardona Patiño y mucho menos que el cuerpo médico que atendió al paciente le hubiere ocasionado un daño que deba ser indemnizado por la entidad que represento, al contrario, al no tener disponibilidad en breve tiempo le consiguió la solución informando en que institución la podrían recibir de acuerdo a su patología.

En mérito de lo expuesto, comedidamente solicito declarar probada la presente excepción.

#### **4. SOLICITUD EXAGERADA DE PRETENSIONES Y CARENCIA DE PRUEBA DE LOS SUPUESTOS PERJUICIOS.**

Esta defensa tiene su fundamento en el hecho que la parte actora solamente se limita reclamar unos supuestos perjuicios que carecen de fundamento fáctico, jurídico y probatorio, teniendo en cuenta que tanto la ley, la jurisprudencia y la doctrina han sido claras en establecer que todo perjuicio debe ser probado, pues no basta con la sola manifestación de haber sufrido unos supuestos perjuicios, ya que es deber de la parte actora demostrar de manera idónea la indemnización que reclama, ya que los perjuicios no han sido establecidos como un premio o un regalo.

Por lo tanto, solicito al despacho se sirva declarar probada esta excepción.

### **CAPÍTULO IV** **PRUEBAS**

Solicito al despacho que, como fundamento de la contestación de la demanda y las excepciones formuladas, se sirva tener y decretar como pruebas aplicables las siguientes:

#### **PRUEBAS QUE SE APORTAN CON LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

##### **1. PRUEBAS DOCUMENTALES:**

En cumplimiento del párrafo No. 1 del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, apporto como prueba documental la siguiente:

1. Historia clínica del paciente Amparo Cardona Patiño.

#### **SOLICITUD DE PRUEBAS**



## **1. PRUEBA TESTIMONIAL:**

Solicito comedidamente al señor Juez librar oficio citatorio al profesional de la salud que mencionaré para que comparezca a audiencia de pruebas y, con fundamento en la historia clínica (atención brindada a la paciente) y su conocimiento técnico sobre la especialidad de la medicina que conozca, exponga todo aquello que le conste con relación a los hechos relatados en la demanda y en esta contestación:

– Carlos Antonio Franco Torres – Medicina General

El profesional de la salud mencionado podrá ser ubicado a través de la oficina de recursos humanos del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, ubicado en la Calle 5 No. 36-08, en la ciudad de Santiago de Cali.

Igualmente, solicito me sea permitido interrogar al señor JUAN SEBASTIAN JIMENEZ CARDONA, quien fue el familiar acompañante de la señora Amparo Cardona Patiño, durante el trayecto de remisión, para que comparezca a la audiencia de pruebas y exponga todo lo sucedido durante el trayecto de remisión de la paciente, las condiciones de salud en que egreso del Hospital de Cartago. El señor Jiménez Cardona puede ser ubicado por intermedio de su apoderada judicial y en las direcciones especificadas en la demanda

## **CAPITULO V** **ANEXOS**

1. Poder especial otorgado el Gerente General del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. para fungir como mandatario judicial de la denotada entidad pública, con sus respectivos anexos.
2. Llamamiento en garantía a la aseguradora Allianz Seguros S.A.

## **CAPITULO VI** **NOTIFICACIONES**

Como apoderado judicial del **HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA” E.S.E.**, recibiré notificaciones judiciales en la Calle 5 No. 36-08 de Cali (V). E-mail: [notificacionesjudiciales@huv.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@huv.gov.co), [responsabilidadmedica@huv.gov.co](mailto:responsabilidadmedica@huv.gov.co), teléfono 6206000 ext. 1740 y 1741.

Los demás sujetos procesales las recibirán en las direcciones que les figuran en el acápite de notificaciones de la demanda.

Cordialmente,



**DAYANNA CAROLINA HERNANDEZ RICO**  
**C.C. No. 1.107.036.465 DE CALI (V)**  
**T.P No. 296.257 DEL C.S.J**